



Doctor:

JOHN LIBARDO ANDRADE FLOREZ

Juez Once Administrativo Del Circuito Judicial De Ibagué

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

DEMANDANTE: YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES y otros

DEMANDADOS: LA NACION COLOMBIANA, POLICÍA NACIONAL, E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL y el INSTITUTO DEL CORAZON DE IBAGUE -DIACORSA- ahora CLINICA AVANTI IBAGUE.

RADICACION: 73001-33-33-011-2018-00504-00

DAVID RODRIGUEZ GIRALDO, mayor de edad, vecino de Ibagué, abogado en ejercicio, con cédula de ciudadanía No. 93.395.575 de Ibagué y Tarjeta Profesional No. 156.681 del H. Consejo Superior de la Judicatura, obrando en ejercicio del poder que me ha sido conferido por los demandantes como se indica en el acápite correspondiente – parte y sus representantes – y de conformidad a los poderes otorgados y cuya personería solicito me sea reconocida; de forma respetuosa y por medio del presente escrito me permito manifestar que formulo demanda Contencioso Administrativa bajo el medio de control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 90 de la C.P., en contra de los demandados quienes se relacionan en el acápite siguiente:

PARTES Y SUS REPRESENTANTES:

ES PARTE DEMANDADA:

- 1. LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL** **POLICÍA NACIONAL** representada legalmente por el director general de la Policía Nacional, el General Jorge Hernando Nieto Rojas o quien a futuro haga sus veces.
- 2. LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL** con Nit. 890.701.033-0 Representada Legalmente por Carmen Patricia Henao Max o quien a futuro haga sus veces.
- 3. DIACORSAS- SUCURSAL INSTITUTO CORAZON DE IBAGUE** ahora **CLINICA AVIDANTI IBAGUE** con NIT _____, representada por Mónica Brigitte Mosos Patiño o quien a futuro haga sus veces



ES PARTE DEMANDANTE:

1. El señor **YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES**, persona mayor de edad y vecino de la ciudad de Espinal-Tolima, quien se identifica con la C.C. No. 1.105.674.379 de Espinal- Tolima, actuando en calidad de Padre de la víctima.
2. La señora **BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL**, persona mayor de edad y vecina de la ciudad de Espinal, quien se identifica con la C.C. No. 1.105.681.211 de Espinal- Tolima, actuando en calidad de madre de la víctima.
3. La señora **LUZ NIDIA LEAL SANCHEZ**, persona mayor de edad y vecina de la ciudad de Espinal- Tolima, quien se identifica con la C.C. No. 65.692.009 de Espinal-Tolima, actuando en calidad de abuela materna de la víctima.
4. El señor **JULIO ALFONSO MOSQUERA CARVAJAL**, persona mayor de edad y vecino de la ciudad de Espinal, quien se identifica con la C.C. No. 17.333.838 de Villavicencio, actuando en calidad de abuelo materno de la víctima.
5. El señor **JULIO ALFONSO MOSQUERA LEAL**, persona mayor de edad y vecino de la ciudad de Espinal, quien se identifica con la C.C. No. 1.105.687.831 de Espinal-Tolima, actuando en calidad de Tío materno de la víctima.

HECHOS Y OMISIONES / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

La realidad fáctica expuesta por los demandantes es la siguiente:

1. La señora **BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL** y el señor **YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES**, unieron sus vidas, y de dicha unión procrearon y engendraron una criatura con la expectativa de que naciera viva y saludable, por ello desde que se enteraron de que tendrían un hijo este fue un motivo de felicidad tanto para ellos como para sus familias.
2. El embarazo de la señora Bertha Julieth Mosquera Leal, le fue diagnosticado a principios del año 2016, año en el que empezó a asistir a las citas de control de toda madre que anhela el bienestar de su hijo debe realizarse.
3. Su primera cita la tuvo con el ginecólogo de la clínica URAMEDICOS de la ciudad de Apartado- Antioquia, el Dr. Gilberto Antonio Arcila Ospina el 15 de Marzo de 2016 en el que luego de realizar un ultrasonido obstétrico afirmó que la señora tenía 8 semanas y 2 días de gestación.
4. Posteriormente, para el día 23 de Marzo de 2016 inicia su control de natalidad en la Dirección de sanidad del comando de policía de Urabá.
5. El día 21 de Abril de 2016 asiste al segundo control prenatal donde le autorizan una ecografía que se realizó el 07 de Mayo de 2016 en la fundación Soma de Chigorodo- Antioquia, con la que la ginecóloga y obstetra Astrid Ayos Flórez manifiesta que se encontraba en su semana 13.2 de embarazo y que el feto estaba en perfectas condiciones.



6. El día 24 de Mayo de 2016 se realiza el tercer control de natalidad en la Dirección de sanidad del comando de policía de Urabá en el que informan que tiene 15.4 semanas de embarazo, gestación que transcurría en condiciones normales.
7. El 30 de Junio de 2016 se llevó a cabo el cuarto control prenatal en sanidad de la escuela Gabriel González del Espinal-Tolima donde le informan que se encuentra en su semana 20.6 y que tanto ella como el feto estaban en perfecto estado de salud.
8. En los días siguientes por exámenes de rutina se dirige al Instituto Radiológico del Espinal donde le realizan una ecografía obstétrica y definen el sexo del bebe, quien era un niño y a quien decidieron nombrarlo Yeison Jerónimo Rodríguez Mosquera.
9. El 10 de Agosto se lleva a cabo el quinto control en el cual el doctor refirió las mismas buenas condiciones que se venían presentando en los anteriores controles, sin embargo el 25 de Agosto de 2016 en evaluación ginecológica la Dra. Carla Mazo de la Clínica Panamericana diagnostica *“Obesidad no especificada” “Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación”*.
10. El 07 de Septiembre se practicó el sexto control sin novedad alguna y posteriormente el día 22 de Septiembre de 2016 se llevó a cabo ecografía en el centro de diagnóstico de Apartado-Antioquia arrojando como resultado que la señora Julieth Mosquera se encontraba en la semana 32.4 de embarazo.
11. El 10 de Octubre de 2016 mi representada asiste a su séptimo control prenatal en la dirección de sanidad del comando de policía de Urabá, cita médica en la que con sorpresa se entera que la información brindada por los médicos que la habían atendido hasta el momento era errónea puesto que para ese momento su embarazo no era de 35 semanas sino de 38, es decir 3 semanas de diferencia; afirmación realizada por el medico Hubert Arnoldo Niño.
12. Por lo anterior, aseguró el Profesional que la fecha próxima del parto no sería la indicada por el anterior médico que la reviso, esto es el 11 de Noviembre sino que se adelantaría para el día 24 de Octubre de 2016 aproximadamente, asegurando además que el parto no podría darse en condiciones normales ya que él bebe era demasiado grande por lo que sería necesario practicar una cesárea.
13. El 22 de Octubre de 2016 la señora Bertha Julieth Mosquera Leal se acerca a urgencias del Hospital San Rafael del Espinal en razón a que se encontraba hinchada, razón por la cual es hospitalizada y se le practican exámenes de laboratorio con los que evidencian que tiene una infección de la vejiga urinaria.
14. El día 23 de Octubre la ginecóloga Blanca Cifuentes evidencia que el útero no está maduro por lo que introduce unas pastillas de Misoprostol intravaginal para ayudar a la maduración cervical, como se evidencia en la historia clínica, sin embargo la Doctora no prestó importancia a la advertencia de la señora Bertha Mosquera de que no podría tener su parto natural sino que debería ser por cesárea como lo había indicado el Dr. Hubert Arnoldo Niño y por ende esta profesional de la medicina niega la realización de dicha cirugía, ignorando también que el embarazo de mi representada era de alto riesgo y que el uso de misoprostol está contraindicado cuando hay alteración en la irrigación fetal y en



el presente caso como había tabicaría fetal se demostraba que no estaba bien la irrigación y la acción adecuada a tomar hubiera sido suspender el trabajo de parto y desembarazar a través de cesárea.

15. En horas de la tarde monitorean al feto y evidencian que se encuentra en buen estado de salud, sin embargo no fue sino hasta el día siguiente 24 de Octubre de 2016, vale decir TRES DIAS DESPUES de la llegada de mi prohijada al centro médico, que la ingresan a cesárea y le informan a los padres del menor que tratarían las afecciones del niño -taticardia- una vez este naciera.
16. El menor Yeison Jeronimo Rodriguez Mosquera nació a las 9:15 am del 24 de Octubre de 2016 con *síndrome de dificultad respiratoria neonatal a taquipnea – aumento de frecuencia respiratoria por encima de los valores normales-* razón por la que lo canalizan y lo dejan en observación.
17. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta la gravedad del estado de salud del recién nacido quien tenía tirajes subcostales y polipnea, este es remitido a la UCI de la Sucursal Instituto del Corazón de Ibagué-DIACORSAS- ahora CLINICA AVANTI IBAGUE, remisión que se llevó a cabo hasta las 11:30 de esa noche.
18. En esta clínica tuvieron al recién nacido en observación con un catéter para diálisis peritoneal; sin embargo pasados tres días el estado de salud del menor empeoraba, como se comprueba en la historia clínica en la que se consignó lo siguiente: *“paciente crítico, grave, con evolución tórpida, en muy malas condiciones generales...”* y en ese orden de ideas el recién nacido falleció como consecuencia de un paro cardíaco el día 30 de Octubre de 2016 a la 01:50 de la mañana.
19. Con lo expuesto, se evidencia la negligencia inicialmente de los médicos que realizaron los controles prenatales a la señora berthta urueña quienes estaban desfasados en cuanto a las semanas de gestación y posteriormente de parte de los médicos del Hospital San Rafael del Espinal quienes no le prestaron a mi representada los servicios médicos urgentes y pertinentes que su estado de salud requería teniendo en cuenta el alto riesgo de su embarazo y la taticardia que presentaba el feto, sino que por el contrario demoraron la realización del parto por cesárea por aproximadamente tres días esperando a que dilatara para llevar a cabo el parto natural e ignorando la advertencia que mi representada le hizo a la ginecóloga de acuerdo a las recomendaciones hechas por el médico que la revisó en su último control prenatal, termino de tiempo que pudo haber sido de vital importancia para corregir o mejorar en la medida de lo posible las afecciones de salud del menor, generando así una pérdida de oportunidad toda vez que los padres del menor tendrán de por vida la sensación de que el destino de su hijo hubiera sido diferente de haberse evidenciado diligencia por parte de las entidades demandadas.
20. Por la muerte del bebe esta familia sufrió perjuicios morales en razón al dolor que genera la ausencia de un hijo respecto del cual se tenían expectativas y sueños de verlo crecer y realizarse como persona, además de que era el primer hijo de esta pareja y a quien por nueve meses se esperó con ansias, meses en los que no se contempló la idea de perderlo puesto que los partes médicos eran positivos, razón por la cual la pérdida de su hijo los tomo por sorpresa y el duelo que genero esta criatura permanecerá en el tiempo pues la ausencia de un hijo no se puede remplazar.



21. Fue tan fuerte el dolor sufrido por estos padres que la señora Bertha Mosquera tuvo episodios fuertes de depresión, lloraba continuamente, tenía sentimientos de rabia y tristeza, tiraba objetos con fuerza, gritaba de manera inconsolable y no dormía ni comía bien, hechos que quedaron registrados en la historia clínica de la paciente.
22. Por último, es importante aclarar que en razón al profundo dolor que sintió la familia con la pérdida del menor, los padres no tuvieron en cuenta realizar el respectivo trámite para emitir el registro civil de defunción del menor dejando pasar el tiempo estipulado por la ley para realizar dicho trámite, sin embargo la paternidad del señor Yeison Rodríguez se puede probar a través de la declaración extra juicio rendida por la señora Bertha Mosquera que se allega como prueba y la evidencia de que en todo el embarazo la gestante estuvo vinculada al sistema de salud a través de su compañero permanente hasta la fecha y padre de su hijo el señor Yeison Orlando Rodríguez Reyes.

DECLARACIONES Y CONDENAS:

PRIMERA: Que se declare que los demandados son administrativa y patrimonialmente responsables por todos y cada uno de los perjuicios ocasionados a los actores en razón a la falla en la prestación de los servicios consistente en la omisión de prestar los servicios de salud requeridos en forma digna, eficiente, oportuna y de calidad a la señora Bertha Julieth Mosquera Leal y su bebe lo que conllevó a que el menor Yeison Jerónimo Rodríguez Mosquera falleciera, generando graves perjuicios en esta familia por el dolor que causa la pérdida de un hijo de quien se tenía grandes expectativas de vida y que murió con tan solo 4 días de nacido; daños que no se encontraban en el deber jurídico de soportar.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad deprecada en la pretensión anterior, se condene a los demandados, vale indicar, la Policía Nacional, la E.S.E. Hospital San Rafael del Espinal y Diacorsas- Sucursal Instituto del Corazón ahora Clínica Avanti de Ibagué a pagar en favor de los demandantes o de quien sus derechos represente, los siguientes o similares perjuicios sin que la tasación de los mismos sea considerada como limitante para que se reconozcan los mayores valores que resulten probados a saber:

2.1. POR CONCEPTO DE DAÑOS MORALES:

- Para **YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES**, la suma equivalente a cien (100) S.M.M.L.V.
- Para **BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL**, la suma equivalente a cien (100) S.M.M.L.V.
- Para **LUZ NIDIA LEAL SANCHEZ**, la suma equivalente a cincuenta (50) S.M.M.L.V.
- Para **JULIO ALFONSO MOSQUERA CARVAJAL**, la suma equivalente a cincuenta (50) S.M.M.L.V.



- Para **JULIO ALFONSO MOSQUERA LEAL**, la suma equivalente a cincuenta (50) S.M.M.L.V.

2.2. POR CONCEPTO DE DAÑOS MATERIALES:

- **DAÑO EMERGENTE:** a los señores **YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES y BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL**, la suma equivalente a cuatro (04) S.M.M.L.V, correspondiente a las sumas que los demandantes debieron sufragar como gastos del funeral del menor Yeison Jerónimo Rodríguez Mosquera.

2.3 POR CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD

- Para **BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL** la suma equivalente a cien (100) S.M.L.M.V.

TERCERA: Que la condena que al efecto se imponga a la parte demandada y en favor de la demandante o de quien sus derechos represente, sea constitutiva, en todo caso, atendiendo los parámetros de la reparación integral y/o atendiendo las medidas de justicia restaurativa.

CUARTA: Que la decisión que ponga fin al proceso, haga tránsito a cosa juzgada y preste merito ejecutivo.

QUINTA: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.

SEXTA: Que todos los pagos que se ordenen hacer a favor de la parte demandante o de quien sus derechos represente, le sean cubiertos en moneda de curso legal en Colombia, ajustando su valor con base en índices de precios al consumidor, certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, o por la entidad que eventualmente llegase a hacer sus veces.

SEPTIMA: Que se condene en costas y agencias en derecho a los demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTOS LEGALES:

De la actividad desplegada por la Policía Nacional, la E.S.E. Hospital San Rafael del Espinal y el Instituto del Corazón de Ibagué -DIACORSA- ahora Clínica Avanti Ibagué, conforme a lo relatado en los hechos de la demanda, se colige la responsabilidad objetiva conforme a los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 9º, 13, 29, 44, 49 y 90º de la Constitución Política; Artículo 140, 188, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; no obstante solicito se le dé aplicabilidad a la reiterada y amplia jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y de la H. Corte Constitucional, en cuanto al precedente jurisprudencial se refiere.



DAÑOS OCASIONADOS A YEISON RODRIGUEZ Y SU FAMILIA.

Los daños que se ocasionaron a la familia Rodríguez Mosquera, son de tipo patrimonial y Extra-patrimonial. Estos daños se materializan, en los daños a la salud de la señora Bertha Urueña y el menor Yeison Jerónimo Rodríguez Mosquera y que le produjeron a este ultimo la muerte, como consecuencia de la omisión por parte de las entidades demandadas al deber de prestar los servicios de salud requeridos en forma digna, eficiente, oportuna y de calidad, hechos que generaron en mis representados grandes perjuicios morales por el dolor que genero para ellos perder al hijo primogénito de Yeison Rodríguez y Bertha Mosquera habiendo esperado su llegada por nueve meses en los que de acuerdo a la información brindada por los médicos tratantes a mi representada no tendría complicaciones.

De la sola muerte del bebe se infiere que la familia Rodríguez Mosquera, sufrió un gran dolor tanto por parte de sus padres como por parte de sus abuelos y tío no solo por la expectativa frente a ese nuevo ser que llegaría a alegrar la familia sino también por ver la tristeza que experimentaron los señores Yeison Rodríguez y Bertha Mosquera al perder a su hijo habiendo tenido por nueve meses la tranquilidad de que el menor estaba en buenas condiciones, pues si bien les advirtieron que él bebe debería nacer por cesárea les informaron que esto se debía a que él bebe era de gran tamaño, advertencia que la ginecóloga que la reviso en la sala de partos de la Clínica E.S.E. Hospital San Rafael del Espinal decidió pasar por alto retrasando innecesariamente el parto, tiempo que hubiera sido vital para salvar la vida del menor.

IMPUTABILIDAD DEL DAÑO.

En el caso sub-judice, se hace responsable a los demandados por falla en el servicio ante la omisión de un deber legal, como quiera que el incumplimiento por parte de la Policía Nacional, la E.S.E. Hospital San Rafael del Espinal y Diacorsas- Sucursal Instituto del Corazón ahora Clínica Avanti de Ibagué de los deberes de prestar los servicios de salud requeridos en forma digna, eficiente, oportuna, integral y de calidad conlleva a que la salud del menor Yeison Jerónimo Rodríguez se deteriora, toda vez que no se realizó a tiempo la cesárea que requería mi representada para tratar con prontitud las enfermedades que aquejaban al feto y que finalmente cobraron su vida, habiendo la señora Bertha Mosquera ingresado por Urgencias al Hospital el día 22 de Octubre de 2016 y teniendo el parto del menor hasta el 24 de Octubre de la misma anualidad, momento en el que su estado de salud era ya bastante delicado, restándole importancia en su momento al hecho de que este era un embarazo de alto riesgo como se había advertido por uno de los galenos tratantes.

En relación al tema de la mala prestación de los servicios de salud en las especialidades de ginecología y obstetricia para las mujeres embarazadas el H. Consejo de Estado ha emitido diferentes pronunciamientos explicando cómo este deficiente servicio es cada vez más común a pesar de constituir una violación tanto a la dignidad humana como a los derechos del menor que está a punto de nacer, en ese sentido la Sentencia del 28 de Agosto de 2014 de esta alta corte expone lo siguiente:



“A las anteriores consideraciones hay que añadir que gran parte de los casos propios de la ginecología y la obstetricia no corresponden a situaciones patológicas. En efecto, además de las enfermedades propias del aparato reproductor femenino, la ginecología y la obstetricia tienen por objeto los procesos naturales del embarazo y el parto. No siendo estos eventos patológicos, lo razonable es pensar que su resultado no será la muerte o enfermedad de la madre, tampoco de la criatura esperada. En tal sentido, en muchos (aunque claramente no en todos) de los casos en que se alega la falla médica en ginecología y obstetricia, el desenlace dañoso refleja una mayor irregularidad.

Así mismo, se ha de tener en cuenta que a diferencia de otras ramas de la medicina, la Ginecología guarda directa relación con la dimensión específicamente femenina de la corporalidad. Es la rama de la medicina que se encarga de la atención a la mujer en cuanto a mujer y de aspectos tan importantes en la realización del programa vital como la fertilidad y la maternidad. Que entre las muy diversas ramas de la medicina, aquella que se ocupa específica y directamente de la mujer sea justamente la que presenta fallas generalizadas (al menos regionalmente) debe alertar sobre la persistencia del menosprecio histórico hacia lo femenino.

A lo anterior, hay añadir que el descuido de la atención ginecológica no solamente no se compagina con la dignidad de la mujer, sino que, en los casos con un componente obstétrico, también resulta seriamente lesivo de los derechos del ser humano esperado y recién nacido. No se olvide, a este respecto, que el obstetra se pone en contacto con el ser humano desde la concepción y que las complicaciones en la gestación, el parto y el puerperio bien pueden repercutir indeleblemente en la vida de una persona¹.” (Negrilla y subraya fuera de texto)

En igual sentido se pronuncia la sección tercera del consejo de estado a través de sentencia del 09 de Octubre de 2014 al afirmar lo siguiente:

“3.2.1 Discriminación por indebida atención ginecobstétrica. Derechos de los niños

Habiendo establecido que en el caso sublite se prestó a la paciente una atención significativamente distinta a la que la lex artis y su dignidad exigían, es de notar que lo acontecido tiene implicaciones de discriminación de género. En efecto, a diferencia de otras ramas de la medicina, la ginecología se ocupa directamente de la atención a la mujer, en aspectos específicos, exclusivos y excluyentes de la corporalidad femenina y tiene una relación directa con la protección y la garantía (o el desconocimiento) del desarrollo de una vida sexual plena, esto es, del desarrollo de su condición de mujer. Asimismo, en la medida en que en los casos obstétricos muy comúnmente se ponen en juego la vida y la integridad del niño recién nacido y por nacer, la negligencia en este ámbito debe calificarse más severamente por comprometer, seriamente, entonces los derechos de dos sujetos de especial protección en nuestro orden jurídico.

Por otra parte, la Sala ha podido verificar, con preocupación, una especial tendencia a la indiferencia y negligencia asistencial y del personal médico en el área de la ginecoobstetricia que se manifiesta en muchos casos en la negación sistemática de la atención especializada (o el retardo en la misma), la superficialidad de ésta cuando se

¹ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 23001233100020010027801 (28.804), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.



presta, la ligereza en la toma de decisiones que pueden comprometer la vida de la madre y el hijo o la integridad de los órganos de la reproducción, etc. Que aquella especialidad de la medicina que trata directamente de la sexualidad femenina justamente se caracterice por sus altos niveles de negligencia es un signo altamente indicativo de la persistencia que el menosprecio milenario de la sexualidad femenina y de la maternidad que esta Corporación no puede dejar de denunciar y frente a la cual se han de adoptar medidas, como se verá más adelante.

3.3 Sobre la pérdida de oportunidad y la imputación de la muerte

Habiendo establecido que la atención prestada a la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez en el Hospital San Diego de Cereté, es preciso determinar si la misma tuvo o no incidencia en la muerte de la criatura esperada. En opinión de la Sala, a pesar de que no sea posible arribar a una certeza plena sobre la supervivencia extrauterina de la hija de los demandantes, sí es posible tener por cierto que sus oportunidades de supervivencia se vieron seriamente afectadas por la inexplicable dilación en el servicio.

La principal razón que impide por seguro que la hija no nacida de los demandantes habría sobrevivido extrauterinamente de haber sido oportunamente atendida, radica en el desconocimiento de la razón exacta de la causa de la muerte de la criatura, al no obrar en el expediente protocolo de necropsia que aclare definitivamente este particular. Sin embargo, dado que no se tiene noticia de que la criatura presentase malformaciones u otras complicaciones de salud durante el resto de la gestación y dado que está comprobado que la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez sufrió un traumatismo seguido de un proceso séptico, circunstancias asociadas estadísticamente con la mortalidad perinatal, se puede suponer que la causa de la muerte de la hija de los demandantes estuvo relacionada con esta causa.

Así mismo, se sabe que la paciente acudió al centro médico poco tiempo después sufrir el traumatismo, cuando todavía no existían signos manifiestos de infección (al menos según la historia clínica), desarrollándose éstos durante el interregno entre el alta médica y su reingreso al hospital. En estos días el proceso infeccioso fue acentuándose gradualmente, con la correlativa disminución de las posibilidades de supervivencia de la hija de los demandantes. Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que la criatura sobrevivió algunas horas a su nacimiento, esto es, al menos cuatro días al inicio de una situación riesgosa (el traumatismo y probable desprendimiento de placenta) cuya peligrosidad fue incrementando con el tiempo. No consta, por otra parte, que la menor haya recibido tratamiento médico (curativo o paliativo) tras su nacimiento.

Ahora bien, cabe suponer que si el organismo de la hija de los demandantes tenía suficiente competencia para afrontar las consecuencias de un proceso séptico gradualmente acentuado durante días, sin recibir tratamiento alguno, sus probabilidades de supervivencia en el momento en que empezó la situación que se reputa riesgosa eran bastante altas. Dado que la paciente probablemente presentaba un desprendimiento placentario en el momento inmediatamente posterior al traumatismo y que dada edad gestacional de la paciente y el hecho de que desde un inicio se había programado una cesárea, lo más probable es que, de haberse diagnosticado oportunamente a la paciente, se hubiera procedido a realizar una cesárea de emergencia, intervención que conlleva un riesgo vital significativamente bajo (si bien no equiparable al parto natural cuando no median condiciones que lo desaconsejen). Así pues, es de suponer que, de haber actuado oportunamente y sin dar lugar al incremento del riesgo, la hija de los demandantes muy probablemente habría sobrevivido.²

² Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 09 de octubre de 2014, Exp. 23001-23-31-000-2000-02299-01 (26.933), M.P. Stella



Debe tenerse en cuenta entonces que las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud, tienen a su cargo el estricto cumplimiento de las leyes de seguridad social y de los reglamentos que emiten las autoridades de salud, en procura de garantizar a los afiliados del sistema general de seguridad social la calidad en los servicios prestados.

Sobre estas obligaciones, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 17 de noviembre de 2001, **Expediente 11001-3103-018-1999-00533-01** asegura que:

“Es principio del sistema organizado, administrado y garantizado por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la calidad en la prestación de los servicios de salud, atención de las condiciones del paciente según las evidencias científicas, y la provisión “de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada” (artículo 153, 3.8, Ley 100 de 1993).

En idéntico sentido, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son responsables de administrar el riesgo de salud de sus afiliados, organizar y garantizar la prestación de los servicios integrantes del POS, orientado a obtener el mejor estado de salud de los afiliados, para lo cual, entre otras obligaciones, han de establecer procedimientos garantizadores de la calidad, atención integral, eficiente y oportuna a los usuarios en las instituciones prestadoras de salud (art. 2º, Decreto 1485 de 1994).

Igualmente, la prestación de los servicios de salud garantizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de profesionales mediante contratos reguladores sólo de su relación jurídica con aquéllas y éstos.

Por lo tanto, a no dudarlo, la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, compromete la responsabilidad civil de las entidades prestadoras de salud y prestándolos mediante contratación con instituciones prestadoras de salud u otros profesionales, son todas solidariamente responsables por los daños causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las personas.”

Además de lo anterior cabe resaltar que la atención prestada en el Hospital del Espinal por parte de los profesionales de la salud no evidencio la debida diligencia toda vez que a pesar de las múltiples advertencias por parte de mi representada para que se le practicara con prontitud la cesárea estos optaron por ignorarla y retardar por tres días el nacimiento del menor, días que hubiesen sido vitales para recuperar y salvar su vida.

Respecto de la actitud de los profesionales de la salud afirma la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 20001-3103-005-2005-00025-01 que *“por regla de principio, los médicos se obligan a realizar su actividad con la diligencia debida, esto es, a poner todos sus*

Conto Díaz del Castillo. Actor: Levis Cecilia Rivero Velásquez y otros. Demandado: Hospital San Diego de Cereté.



conocimientos, habilidades y destrezas profesionales, así como todo su empeño, en el propósito de obtener la curación del paciente o, en un sentido más amplio, a que éste consiga en relación con su salud o con su cuerpo el cometido que persigue o anhela³".

INCUMPLIMIENTO DE ESTRICITOS DEBERES LEGALES:

El Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional del Tolima y la Clínica Nuestra Señora del Rosario, tienen a su cargo el estricto cumplimiento de las leyes de seguridad social en salud y de los reglamentos emitidos por las autoridades, en procura de garantizar a sus afiliados la calidad en los servicios prestados.

Es principio del sistema organizado, administrado y garantizado por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la calidad en la prestación de los servicios de salud, atención de las condiciones del paciente según las evidencias científicas, y la provisión *"de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada"* (artículo 153, 3.8, Ley 100 de 1993).

En idéntico sentido, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son responsables de administrar el riesgo de salud de sus afiliados, organizar y garantizar la prestación de los servicios integrantes del POS, orientado a obtener el mejor estado de salud de los afiliados, para lo cual, entre otras obligaciones, **han de establecer procedimientos garantizadores de la calidad, atención integral, eficiente y oportuna a los usuarios en las instituciones prestadoras de salud (art. 2º, Decreto 1485 de 1994).**

Igualmente, la prestación de los servicios de salud garantizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de profesionales mediante contratos reguladores sólo de su relación jurídica con aquellas y éstos.

Al respecto, los artículos 177, 178 y 185 de la ley 100 de 1993 aseguran que así como la función básica de las entidades promotoras de salud es la de *"organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados⁴"* además de *"controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las instituciones prestadoras de servicios de salud⁵"*; las instituciones prestadoras de servicios de salud deben prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la ley, **teniendo como principios básicos la calidad y la eficiencia.**

Por lo tanto, a no dudarlo, la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la *lex artis*, compromete la responsabilidad

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia. 05 noviembre 2013. Radicación: 20001-3103-005-2005-00025-01, Magistrado ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Actor: Stella Ovalle Gont. Demandado: Víctor Hugo Carrillo García.

⁴ Artículo 177, Ley 100 de 1993

⁵ Numeral 6 Artículo 178, Ley 100 de 1993



de las entidades prestadoras de salud *y prestándolos mediante contratación* con instituciones prestadoras de salud u otros profesionales, *son todas solidariamente responsables por los daños causados*, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las personas.

COMPETENCIA:

Es usted competente señor Juez Administrativo del Circuito de Ibagué, para conocer de la presente acción, en primera instancia, en razón a lugar del domicilio principal de los demandados, de conformidad a lo normado en el numeral 6º del artículo 156, de la ley 1437 de 2011.

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA / JURAMENTO **ESTIMATORIO:**

Atendiendo los lineamientos establecidos en el art. 206 del código general del proceso y en forma razonada, a la fecha de presentación de la demanda, declaro bajo la gravedad de juramento que estimo la cuantía en la suma equivalente **a cuatro (04 s.m.l.m.v.) salarios mínimos legales mensuales vigentes** o lo que es lo mismo la suma de tres millones ciento veinticuatro mil novecientos sesenta y ocho mil pesos (\$3.124.968.00), tasación que corresponde a los conceptos determinados como daño emergente así:

- **DAÑO EMERGENTE:** a los señores **YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES y BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL**, la suma equivalente a cuatro (04) S.M.M.L.V, correspondiente a las sumas que los demandantes debieron sufragar como gastos del funeral del menor Yeison Jerónimo Rodríguez Mosquera.

Lo anterior, **sin incluir los perjuicios morales y demás inmateriales**, tal como lo prescribe el Art. 157 del C.P.A.C.A., en concordancia con lo establecido en el numeral 6º del artículo 155 de la norma ibídem.

En ese mismo sentido el código general del proceso, en su artículo 26, establece como a continuación se transcribe:

“(…) **ARTÍCULO 26. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA.** *La cuantía se determinará así:*

1. **Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación.** Las negrillas y subrayas son de mi autoría.

De la norma antes transcrita se puede colegir, igual que en el articulado correspondiente al C.P.A.C.A., que la estimación solo debe incluir los perjuicios



materiales que subjetivamente se reclamen como causados al momento de presentación de la demanda (resalto y subrayo), es por esta potísima situación normativa que este representante se remite en los términos señalados en el acápite allí denominado “Estimación Razonada de la Cuantía / Juramento Estimatorio:”

RELACION PROBATORIA:

Solicito al Honorable Despacho se decreten, practiquen y tengan como material probatorio los siguientes:

A) DOCUMENTALES QUE SE APORTAN:

1. Constancia de no acuerdo expedida por la Procuraduría 201 Judicial I para asuntos administrativos.
2. Poderes en original, debidamente conferidos y que se aceptan para actuar, en siete (07) folios.
3. Copia autentica de los Registros Civiles de nacimiento de los demandantes, en dos (02) folios.
4. Declaración Extrajuicio No. 3577 rendida por Bertha Julieth Mosquera Leal, en dos (02) folios.
5. Acta de nacido vivo, en un (01) folio.
6. Historia Clínica de la señora Bertha Julieth Mosquera Leal, en ciento veintitrés (123) Folios.
7. Certificado de existencia y representacion legal de la Clínica Avidanti Ibagué en () folios.

B) PERICIALES.

PERICIAL 1.

Solicito al Honorable Despacho, se sirva autorizar un plazo prudencial para que esta defensa presente pericia Psicológica, la que se hará con la Auxiliar de la Justicia **KAROL VIVIANA MARTINEZ PRADA**, mayor y vecina de la ciudad de Ibagué, identificada con la C.C. No. 38.363.895 expedida en Ibagué, con Tarjeta Profesional de Psicóloga No. 120425 del Colegio Colombiano de Psicólogos y T.P. No. 1403 de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima; quien previa valoración de todos y cada uno de los actores dará cuenta al Despacho, entre otros, de aspectos como afectación psicológica de los mismos actores, si se presentan afectaciones a las condiciones de existencia y/o en condiciones de normalidad, nombres científicos de las afectaciones psicológicas que pueden presentar los demandantes, así como el origen de las mismas.

PERICIAL 2.

Solicito al Honorable Despacho, se sirva oficiar a la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad, para que previa designación de perito experto y valoración del Historial Clínico, se resuelva el siguiente cuestionario:



1. Precísele al despacho, de acuerdo al historial clínico de la paciente, ¿cuáles fueron las causas que conllevaron a la muerte del menor Yeison Jerónimo Rodríguez Mosquera?
2. Precísele al despacho si la atención y los medicamentos suministrados a la señora Bertha Julieth Mosquera Leal fueron los indicados con relación a los síntomas que presentaba el feto.
3. Indíquese al despacho si la atención brindada y los procedimientos realizados a la señora Bertha Julieth Mosquera Leal fueron oportunos para proteger su salud y la del menor.
4. Indíquese al despacho si conforme a la Historia Clínica o los síntomas del menor este hubiera podido continuar con vida de haberse prestado con prontitud los tratamientos y medicamentos que tanto el cómo su madre requerían.
5. Indique si está contraindicado suministrar misoprostol para la maduración del cuello cervical cuando se presenta taticardia fetal.
6. ¿Que indica que un feto tenga taticardia?
7. ¿Qué es la irrigación fetal?
8. En el caso de estudio ¿la irrigación del menor Yeison Jerónimo Rodríguez Mosquera era la adecuada?
9. ¿Cuáles son los procedimientos y protocolos adecuados para atender un feto que presenta alteración en la irrigación fetal?
10. ¿El uso de misoprostol para maduración de cuello cervical era el medicamento adecuado para tratar el embarazo de la paciente Bertha Mosquera?
11. ¿Considera usted que en el caso en estudio se presentó falla médica, y de ser positiva la respuesta anterior explique por qué, y bajo que modalidad, falla en el diagnóstico, falla asistencias, perdida de oportunidad u otras?

PERICIAL 3

Solicito al Honorable Despacho, que por remisión al CGP conforme lo expuesto en el artículo 227 del CPACA, se de aplicación al artículo 227 del Código General del Proceso, otorgándose al Dr. José Luis Herrera Rendon, un término prudencial, que en todo caso sea superior a diez (10) días hábiles, a fin de que previa valoración del Historial Clínico emita dictamen pericial dentro del proceso de la referencia.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Dr. Herrera Rendon es Médico Cirujano con una vasta experiencia en la ciencia de la salud teniendo en cuenta que es Magister en Calidad de la Prestación de Servicios de Salud, Master en Gestión Clínica de la



Seguridad del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria de la Universidad de la Rioja (España), Especialista en Gestión de la Calidad y la Normalización Técnica, Especialista en Gerencia de la Comunicación Corporativa, Especialista en Gestión Humana de las Organizaciones, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud, Especialista en Gestión Pública, Aspirante al Título de Experto Universitario en Gestión del Conocimiento y Procesos en la Organización y Estudiante de post grado para optar al Título de Especialista en Responsabilidad Medica, con lo que se evidencia que es un profesional idóneo para emitir concepto especializado en salud respecto de los hechos que en el presente proceso se debaten.

Esta solicitud se efectúa teniendo en cuenta que, por la complejidad del asunto y la extensión de la historia clínica, sumado a las circunstancias especialísimas por las que atraviesa el país y el mundo entero relacionadas con la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, el profesional de la salud no tuvo la posibilidad de culminar el Dictamen Pericial dentro del término previsto para la presentación de la reforma de la demanda ya que tiene otras ocupaciones de índole laboral que se lo impidieron.

TESTIMONIALES:

Solicito al Honorable Despacho, se sirva fijar fecha y hora para que se lleve a cabo la recepción del testimonio de:

- **LUIS ALFREDO NUÑEZ GIRALDO**, mayor y vecino del municipio del Espinal, identificado con la C.C. No. 1.033.705.598, quien puede ser notificado en la Cra 3 # 6- 70 Barrio Betania del municipio del Espinal o al correo electrónico lualnugi0311@gmail.com.

A este testigo le constan aspectos importantes relacionados con la vida personal, laboral, familiar y de ciertas circunstancias de la víctima principal así como de los actores; es por ello que ruego al Honorable Despacho, se sirva decretar la práctica y recepción del mismo, para el esclarecimiento de la verdad real y procesal.

DECLARACION DE PARTE:

Solicito a su señoría se sirva escuchar en declaración de parte a los demandantes que se relacionan a continuación:

- YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES
- BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL

ANEXOS:

1. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
2. Copia de la demanda (sin anexos) para el archivo.
3. Tres copias con sus respectivos anexos para el traslado a los demandados.



NOTIFICACIONES.

DEMANDADOS:

- **LA POLICÍA NACIONAL** se notifica en el Comando de Policía del Departamento del Tolima Ubicado en la Carrera 48 sur No. 155- 197 Picaleña, Ibagué- Tolima o al correo electrónico metib.oac@correo.policia.gov.co.
- **LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL** se notifica en la Calle 4 No. 6-29 Espinal- Tolima, o al correo electrónico asesoriajuridica@hospitalsanrafael-espinal.gov.co
- **DIACORSAS- SUCURSAL INSTITUTO CORAZON ahora CLINICA AVIDANTI DE IBAGUE** se notifica en la Avenida 19 Carrera 13 Vía Calambeo, Ibagué- Tolima. Se desconoce correo electrónico de notificaciones.

DEMANDANTES:

- Los demandantes y el suscrito apoderado, las reciben en la carrera 3ª No. 8-39 edificio El Escorial, oficina T-5 en la ciudad de Ibagué, a los abonados telefónicos 2619207- 3162237653 o en el correo electrónico davidrodriguez.gabogados@gmail.com.

Del Señor Juez,

Cordialmente,

DAVID RODRÍGUEZ GIRALDO

CC No. 93.395.575, de Ibagué.

TP No. 156681 del C.S. de la J.